

ENSAYO

Continuidades y Rupturas en la Historia Chilena: Otra Hipótesis sobre la Crisis Chilena de 1973 *

Claudio Véliz **

Muchas de las descripciones e interpretaciones de la crisis chilena de 1973 han dado demasiada importancia a los factores externos y relativamente poca a los asuntos internos. Las grandes transformaciones que propiciaba el programa de gobierno de Salvador Allende —apertura hacia los países comunistas, nacionalización de la gran minería del cobre, reforma agraria— no constituían en sí mismas rupturas con la tradición chilena capaces de precipitar una crisis como la de 1973. Hubo, en cambio, otros elementos, especialmente de tipo económico, que sí implicaron una ruptura y que fueron los que hicieron imposible que Allende terminara legalmente su mandato constitucional. Este artículo se ocupa de los factores de ruptura de carácter no económico y explora tres de ellos: el sistema de cuotas políticas al interior del gobierno de la Unidad Popular, la tolerancia del Gobierno ante el desarrollo de organizaciones revolucionarias paramilitares y el estilo de gobierno y de vida personal que adoptó Allende y que lo distanciaron de la imagen de sobriedad y respetabilidad que siempre en Chile ha rodeado a la Presidencia. A la luz de estos factores el autor investiga las causas del fracaso de las conversaciones entre Allende y la D.C. que comenzaron a fines de julio de 1973.

* Trigésima Conferencia Anual realizada en Canning House, 2 Belgrave Square, London SW1X 8PJ el 2 de abril de 1981.

Traducido y publicado con la debida autorización.

** Ph. D., London School of Economics. Ex-director del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Profesor de sociología de la Universidad de La Trobe. Entre sus libros destacan *Historia de la Marina Mercante de Chile* (Santiago, 1961) y *The Centralist Tradition of Latinamerica* (Princeton, 1980).

Otra Hipótesis Sobre la Crisis Chilena de 1973¹

Cuando llegaron los españoles, los conceptos de vejez y muerte natural no formaban parte de las creencias de los indios mapuches. El hombre era para ellos saludable e inmortal. La muerte sólo ocurría cuando intervenían las armas o la brujería, y como el extendido grupo familiar, base de la organización tribal, estaba fuertemente ligado por tabúes de lealtad, generalmente se aceptaba que la muerte sólo podía ser causada por forasteros².

Culpar a otros cuando las cosas van mal continúa siendo uno de los rasgos más comunes y menos atractivos de la condición humana: es un método de descripción y análisis, tan sencillo como insuficiente; no obstante, durante las épocas de formación de la sociedad, puede haber jugado un rol positivo al arrojar la animosidad hacia el exterior de la tribu, permitiendo a sus miembros concentrar sus energías en las tareas inmediatas de supervivencia y reconstrucción.

Con la llegada de la civilización, y dentro de nuestra tradición cultural desde la época griega, al menos desde Esquilo, hemos aprendido a transigir con las inquietantes complejidades de la introspección. Podemos tratar de escapar de las Furias, pero sospechamos que viven dentro de nosotros mismos; aún más, podemos buscar culpables o víctimas propiciatorias, más para encontrar explicaciones nos volvemos a nuestro mundo interior.

Muchos de los análisis y subsecuentes interpretaciones de la crisis chilena de 1973 han sido distorsionados por la aplicación de la hipótesis mapuche del origen externo del mal. Se han hecho demasiados esfuerzos por tratar de descubrir culpables externos, y a los factores domésticos se les ha dado menor importancia de la que tenían. Cuando se encuentran, se las caracteriza como ecos distantes, explicados solamente como parte de una confrontación mundial entre grandes potencias; esto es, como ejemplos locales de una omnipresente lucha internacional.

Esta tendencia ha sido estimulada por la insistencia de los grupos protagónicos que aluden a sus adversarios como meros instrumentos en manos de tal o cual organización extranjera. Chile y los chilenos han sido reducidos, por un ruidoso acuerdo mutuo, a la categoría de objetos manipulados por extranjeros; la explicación para una era desgraciada no se busca dentro de

¹ Este artículo es parte de un estudio más detallado de la historia de Chile realizado con el generoso auspicio de "Tinker Foundation".

² Alonso González de Nájera, *Desengaño y reparo de la guerra del reino de Chile*, editor José Toribio Medina, Santiago, 1889, pp. 48-49. Ver también José Toribio Medina, *Los aborígenes de Chile*, Santiago, pp. 157-241.

nosotros sino en los planes, conspiraciones, ambiciones y temores de astutas entidades de lejanas tierras.

En un mundo tan interdependiente como el nuestro, ninguna política nacional puede aspirar a la tranquilidad de un aislamiento total. Indudablemente los factores externos jugaron un rol en la crisis de 1973, como lo habrían hecho en cualquier otra confrontación comparable en otro sitio del mundo, pero sin excluir otros factores.

Exponerse al virus que ocasiona la influenza es condición necesaria para una epidemia de gripe, pero no es suficiente. Mucha gente goza de inmunidad, y la clave de su resistencia se encuentra dentro de sus cuerpos, en un conjunto de características, algunas adquiridas, otras heredadas y, la mayoría, modificadas por el uso, la experiencia o, simplemente, por el transcurso del tiempo, las que, consideradas en conjunto, distinguen a un individuo de otros de su misma especie.

Las sociedades también se distinguen unas de otras por pautas de conducta, afinidades y prejuicios, en parte expresados pero también modificados y ligados entre sí por el lenguaje, la religión y una tradición histórica común. A través del tiempo, estos rasgos compartidos sufren modificaciones, renovaciones, intensificaciones o atenuaciones perceptibles que pueden conformar pautas de continuidad o ruptura. Yo creo que esto es una realidad respecto de la gente que habitó el Gran Valle Central de Chile durante el último milenio. Ellos han compartido rasgos identificables e inclinaciones que, en conjunto, pueden ser objetivamente descritas como expresiones de un carácter nacional.

El concepto de carácter nacional no es muy aceptado en la historiografía moderna inglesa. En el mejor de los casos, es rechazado como un desatino indefinible e inconsecuente. En el peor, acusado como responsable de guerras y otros desastres. En 1940, Hamilton Fyfe dijo confidencialmente que "... lo ilusorio del carácter nacional... será históricamente considerado con desprecio. El mismo desprecio que sentimos por la antigua creencia del origen divino de los reyes o por la imposición de tal o cual religión en el mundo, o por la justicia de las "ordalías" ..."³.

Es perfectamente plausible pensar que la mayoría de nosotros comprende el significado de lo que vagamente se describe como carácter nacional —a pesar de lo difícil que es definirlo con precisión— como muchos de los más importantes conceptos usados en el estudio de los fenómenos sociales y políticos. Sir Harold Nicholson lo dijo acertadamente, aunque con algún exagerado entusiasmo, en su conferencia de 1938 en Montague Burton, invitando a los asistentes a concordar en que "existe algo como carácter nacional, algo reconocible, formativo y político", agregando que "nunca podremos entender la política, a menos

³ Hamilton Fyfe, *The illusion of national character*, Londres, 1940, p. 5.

que comprendamos el carácter nacional... la política nacional está influida e incluso regida por el carácter nacional"⁴.

Me desagradan las declaraciones conceptuales restringidas por palabras como "jamás" o "siempre", pero me encuentro más cerca de los puntos de vista de Sir Harold Nicholson que de los de Mr. Fyfe. Hasta con sus deficiencias, el concepto de carácter nacional es útil y sugerente y me alegra considerar este artículo —en parte— como un estudio preliminar de algunas de las constantes y variables domésticas que pueden ayudar a comprender el carácter nacional chileno.

El factor más persistente en la formación de la sociedad chilena es su paradójal insularidad. El hogar del pueblo chileno es una isla rodeada de tierra, separada del territorio continental por el Desierto de Atacama y las montañas del segundo macizo más alto del mundo, los que constituyen barreras tan grandes como el Canal de la Mancha y el Estrecho de Corea, y, como en el caso de Japón con respecto a Asia, o de Inglaterra con respecto al continente europeo, determinan una insularidad que ha tenido una influencia moldeadora en la sociedad chilena, comparable en importancia a aquellas que han ayudado a dar forma a las sociedades en Inglaterra y Japón⁵.

No obstante, existen diferencias significativas. A pesar de que la mayor parte de su territorio está cubierto por cadenas montañosas y está bordeado por la costa más larga del mundo en relación a su superficie, Chile no ha acunado ni culturas marítimas ni andinas de importancia. Los habitantes de lo que hoy día es el territorio nacional se han mantenido alejados de las inhóspitas fronteras de su patria, instalándose, en cambio, en el casi ininterrumpido valle que se anida entre las líneas paralelas de los Andes y la costa, distantes de los peligros de

⁴ Harold Nicholson, *National character and national policy*, Conferencia sobre Relaciones Internacionales, Montague Burton, 1938, pp. 2-12. Ver también Ernest Barker, *National character and the factors in its formation*, London, 1948.

⁵ Para una opinión contraria sobre la influencia de la geografía, véase a Marcus Heslinga, *Geography and nationality*, Conferencia Estyn Evans, Queen's University de Belfast, 1978. De acuerdo a Heslinga, "... el contexto físico en muchas oportunidades se ha considerado como un factor importante, a veces el principal, en la determinación de la nacionalidad. Los geógrafos desconfían hoy de estas teorías. La mayoría considera los conceptos nacionalistas como 'mitos físicos' de la nacionalidad, los que junto a otros tantos mitos metafísicos y culturales, conforman las principales ilusiones respecto del origen de las naciones...". p. 16. Referente a la insularidad, Heslinga indica que "los mares, también, pueden ser un lazo de unión y una zona divisoria... las principales diferencias no se deben al contexto geográfico sino que al contexto social"., p. 17.

la montaña y de los engaños del océano. En esto parecen haber seguido las costumbres de la primera presencia humana detectada en esta tierra, diez mil años atrás o más⁶.

Una definición geográfica precisa del Valle Central de Chile fijaría su límites en la ribera norte del río Maipo, sólo a unas pocas horas del centro de Santiago, y en el río Bío Bío, 350 millas al sur, pero limitaría su significado cultural y político. Sería mucho más acertado considerar que la región del Valle Central se extiende desde una frontera más o menos larga situada en el "Norte Chico", entre La Serena y Valparaíso, tal vez en el lecho del río Choapa, hasta la costa frente a la isla de Chiloé. El origen y la posterior evolución de la nación chilena están íntimamente ligados con la insularidad **sui generis** de este casi plano, fértil y bien regado gran Valle Central. Dotado de un benigno clima marítimo, que se debe principalmente a la proximidad de la corriente fría de Humboldt que corre hacia el norte desde la Antártida, el gran Valle Central es un lugar mucho más atractivo para vivir que las frías tierras altas o las escabrosas costas azotadas por el viento. Ha estado siempre bien poblado, aunque nunca en exceso, sin experimentar presiones demográficas producidas por emigraciones masivas a las tierras altas o, aún más, a las fronteras o ultramar. Hoy día casi el noventa por ciento de los once millones y medio de habitantes de Chile está instalado en el gran Valle Central, y más de la mitad del total viven en las dos regiones metropolitanas de Aconcagua y Santiago, las que, consideradas en conjunto, significan menos del cuatro por ciento del territorio continental del país.

La historia de Chile es, predominantemente, la de los habitantes del Valle Central; suya ha sido la decisiva influencia, ciertamente comparable con la de Castilla en la historia de España o la de los ingleses en la historia británica, con la salvedad de que en Chile el papel del regionalismo es mínimo o inexistente; debiendo entenderse que el influjo secular del Valle Central es más bien un aspecto social y político de la penetración centralista en la historia nacional que una forma de dominación regional.

Es obvio que muchos hechos de importancia han ocurrido fuera del Valle Central; en el extremo norte han sido cruciales las campañas militares; han sido incorporadas las islas del Pacífico; se han descubierto y explotado exitosamente grandes

⁶ Los restos más antiguos encontrados en Chile, que indican asentamiento permanente, fueron desenterrados en San Vicente de Tagua Tagua, en el Valle Central, aproximadamente a mitad de camino entre Rancagua y Curicó. Pruebas de carbono 14 los fechan 9.430 años a.C., lo que les da a lo menos 10.000 años de antigüedad. Ver Grete Mostny, *Prehistoria chilena*, Santiago, 1977, pp. 19-21, 183.

depósitos minerales al sur del Estrecho de Magallanes y en el desierto del norte, pero estos acontecimientos no han atenuado la preponderancia del centro, sino que han alcanzado su significado pleno en tanto atraían el reconocimiento y reacción del núcleo central metropolitano de la nación.

A pesar de los abrumadores obstáculos para el establecimiento de comunicaciones terrestres con el resto del continente, de la enorme extensión de la costa y de su tradicional dependencia del comercio con el exterior, los chilenos son isleños ligados a la tierra con una curiosa disposición política a mirar hacia adentro, muy bien simbolizada por Santiago, la capital de la "isla", que, cuatro siglos después de su fundación, sigue aún creciendo y prosperando.

El territorio actual de Chile es mayor que el de Japón y Gran Bretaña en conjunto, y gran parte del mismo —excluido el Valle Central— es muy montañoso y de difícil tránsito; aún así, a diferencia de Japón y Gran Bretaña, estos obstáculos, sumados a las consecuencias de varias invasiones extranjeras exitosas, no han creado diferencias regionales culturales o sociales como las que existen hasta hoy en las Islas Británicas y en Japón. A la insularidad de la nación, debe añadirse la notable homogeneidad cultural de sus habitantes como constante decisiva en la historia de Chile.

En la primera gramática y diccionario de lo que entonces fue simplemente descrito como "la lengua de Chile", el sacerdote jesuita Luis de Valdivia animó a sus lectores expresando que "en el Reino de Chile sólo existe esta lengua en uso, desde Coquimbo y sus alrededores hasta la isla de Chiloé, y aún más allá, cubriendo una distancia de casi 400 leguas de norte a sur, esto es, la longitud completa del Reino de Chile". Esto fue confirmado dos siglos después por otro jesuita, el humanista Ignacio Molina, quien pensó que, probablemente, "Chile, en sus orígenes, había sido poblado por una sola nación... ya que todos los aborígenes que lo habitaban, siendo independientes unos de otros, hablaban el mismo idioma y tenían una apariencia similar". En efecto, se maravilló de que el idioma araucano "no hubiera producido ningún dialecto, a pesar de haberse extendido a través de un espacio de 1.200 millas, entre tantas tribus no subordinadas, totalmente desprovistas de todo intercambio literario. Los chilenos que viven en el grado 24 de latitud hablan el mismo lenguaje que los nativos del grado 45..."⁸.

⁷ Luis de Valdivia, *Arte vocabulario y confesionario de la lengua de Chile*, edición facsímil de Julio Platzman, Leipzig, 1887 (1ª edición fechada en Lima, 1606); prefacio.

⁸ J. Ignacio Molina, *The geographical natural and civil history of Chili*, traducida del italiano, Londres, 1809, Vol. II, pp. 3, 7, 351-352. Las

El lenguaje español que une a los chilenos de hoy está tan exento de acentos regionales, entonaciones o dialectos como lo estaba el araucano de hace cinco siglos. A pesar de las grandes distancias que separan las diferentes regiones del país y la relativa carencia de movilidad de la mayoría de la población, no existen acentos regionales discernibles que remotamente pudieran compararse a los que se detectan fácilmente cuando se viaja a través de Argentina, Francia, Colombia o Inglaterra. Las diferencias de acentos entre cordobeses, entrerrianos y porteños en Argentina son tan notorias y sociológicamente importantes como la ausencia de tales diferencias entre coquimbanos, santiaguinos o penquistas en Chile. La única excepción a esta situación general es la pequeña entonación remanente causada por el bilingüismo de, por ejemplo, los descendientes de colonos alemanes que llegaron al sur de Chile a mediados del siglo XIX, o la comunidad británica de Valparaíso, o los mapuches en las cercanías de Temuco o Concepción. Estas excepciones, sin embargo, son suficientemente caprichosas como para confirmar la regla, ya que el lenguaje es mucho más que una de las tantas manifestaciones culturales de similar importancia; el lenguaje es el factor primordial y definitivo sin el cual no puede haber ni cultura ni sociedad. En el pasado, el uso metafórico invitaba a considerar la sociedad como un organismo, un río o un árbol; en nuestros días, entendemos la sociedad principalmente, o tal vez exclusivamente, como lenguaje, el que, por sí solo, moldea y modifica la mente de sus miembros y los esquemas de sus relaciones.

El uso de un lenguaje común en un territorio tan extenso como el gran Valle Central de Chile, en la época en que llegaron los españoles, es de importancia histórica; pero si agregamos el hecho de que, cinco siglos más tarde, el español en uso en la República está virtualmente desprovisto de acentos regionales,

observaciones del lenguaje hechas por Valdivia y Molina se confirman en numerosos informes de cronistas de la conquista. Ver Medina, *Aborígenes*, p. 96. La palabra *Arauco* y todas sus derivaciones: *Araucano*, *Araucanía*, etc., son una invención en el siglo XVI del poeta Alonso de Ercilla y Zúñiga, autor del poema épico *La Araucana*. Aparentemente Ercilla construyó la nueva palabra partiendo de *raghco*, el término mapuche para *agua barrosa*, usado por los habitantes locales para designar la región al sur del Bío Bío, donde tuvieron lugar los principales encuentros de la guerra entre araucanos y españoles. Para evitar confusión usaré la palabra *mapuche* para referirme a los habitantes del Valle Central de Chile, desde el Norte Chico en la zona norte hasta el Golfo de Reloncaví en el sur, reservando el nombre *araucanos* para los mapuches que habitaban la región entre los ríos Bío Bío y Toltén, quienes encabezaron la resistencia contra la invasión española. Sobre esto, véase también Sergio Villalobos, *Historia del pueblo chileno*, Santiago, 1980, vol. I, p. 71 n.

esto constituye un elemento significativamente crucial como evidencia histórica y sociológica de una homogeneidad cultural consecuente con una fuerte tendencia unitaria. Sea como causa o efecto, o como ambos, esta tendencia parece haber influido, por sí misma, en una insularidad que, de otro modo, podría haber sido muy sensible a influencias periféricas y vulnerable a amenazas de prematura dispersión.

La ausencia de fuertes divisiones regionales facilitó la acción de gobiernos burocráticos civiles y centralistas, una tercera constante de influencia decisiva en la estructuración de la sociedad chilena. Al igual que el resto de las Indias, Chile heredó el fuerte centralismo de Castilla, pero mientras en otras partes esta tradición sufría la influencia, a veces deformante, de la intervención militar en los asuntos públicos, aquí la tradición del ejercicio civil de la autoridad política fue sólidamente establecida y fortalecida durante los siglos de gobierno colonial —paradójicamente— como consecuencia de las exigencias demandadas por la prolongada guerra con los araucanos en el sur del país.

Los primeros choques entre los invasores españoles y los habitantes locales tuvieron lugar en 1541, y en el lapso de seis años la resistencia indígena fue exterminada a lo largo del Valle Central. Esto fue logrado, en parte, por la abrumadora superioridad militar de los españoles y, en parte, por la masiva emigración indígena hacia el sur del río Bío Bío. Los españoles se instalaron en el corazón del Valle Central concentrando su atención en la formación de un grupo de prósperas empresas mineras y agrícolas, así como en las repercusiones políticas de la guerra civil en el Perú. Solamente diez años después de su llegada al Valle Central, los españoles estuvieron en condiciones de llevar la guerra al sur del Bío Bío, pero para entonces los araucanos habían hecho buen uso de esta tregua. Las experiencias de sus primeras derrotas los indujeron a modificar su organización militar, descartando sus armas tradicionales en favor de otras nuevas mejor adaptadas a la lucha contra sus adversarios europeos y perfeccionando tácticas discontinuas, adecuándolas mejor al difícil terreno del sur. Los españoles sufrieron una sucesión de aplastantes derrotas. La guerra que ellos confiaban terminar en pocos meses se convirtió en una larga y costosa empresa. Cada primavera los colonos del Valle Central tenían que montar sus caballos y cabalgar a través de las 400 millas que los separaban del frente de guerra. Cada otoño los exhaustos sobrevivientes, muchos de ellos heridos, volvían a sus hogares del norte. La actividad económica de la región del Valle Central se resistió considerablemente, ya que los indios que normalmente trabajaban para los españoles en las minas y en los campos, se marcharon también al sur para pelear al lado de sus líderes. Medio siglo después —y tras la muerte de más de mil españoles, incluidos dos gobernadores muertos en

combate—, la frontera militar aún estaba marcada por el río Bío Bío y todas las colonias fundadas al sur del río habían sido destruidas por la ofensiva araucana de 1598. Incluso las colonias del Valle Central se vieron amenazadas.

Durante muchos años, los colonos del Valle Central habían estado enviando peticiones a España en que rogaban ser relevados de la responsabilidad de continuar la guerra en el sur. Ellos consideraban haber hecho bastante para merecer el disfrute pacífico de sus tierras. Sus deberes militares no podían compararse con los de otras partes de las Indias, donde las guerras habían sido de corta duración e invariablemente exitosas. En la temida frontera del sur de Chile, sesenta años de lucha incesante no había logrado desplazar ni en una pulgada a los araucanos desde que el conquistador de Chile y fundador de Santiago, Pedro de Valdivia, había muerto en la batalla de Tucapel. Los araucanos no eran una gentuza desorganizada de indios desnudos, sino disciplinados y talentosos soldados que podían usar las armas de los europeos contra el enemigo con absoluta eficacia. Hacia finales del siglo, los araucanos eran capaces de desplegar una más numerosa y mejor caballería que los colonos españoles y sus improvisados auxiliares; también manejaban la pica larga, arma tradicional de los "tercios" españoles, y sus escuadrones podían formar filas o cuadros que eran virtualmente invulnerables para las cargas de caballería. Sólo soldados profesionales y experimentados podían oponérselos con alguna esperanza de éxito, y las peticiones de los colonos insistían ante el poder central para que destinara un ejército profesional pagado, permanentemente acantonado en la zona de guerra.

Este requerimiento fue eventualmente aceptado por Felipe III en 1603. Los colonos del Valle Central fueron exonerados de nuevos servicios militares y contribuciones económicas. Fue organizada una fuerza militar regular, cuyo cuartel general estaba en Concepción, y era pagada por el "real situado" —literalmente el Estado— directamente desde la Tesorería Real del Virreinato del Perú⁹.

Estos arreglos estaban destinados a poner un pronto fin a la guerra. Mantener en pie un ejército significaba una gran cantidad de dinero, y la Corona no estaba dispuesta a gastar más de lo estrictamente necesario. Al ganar la guerra, las tropas serían licenciadas y posiblemente algunos oficiales se quedarían para unirse a los nuevos colonos y formar el núcleo de una nobleza agraria que asumiría, como era tradicional, cierta forma de responsabilidad militar para la defensa de esa región.

La guerra, sin embargo, no terminó. Continuó intermitentemente durante los siguientes 300 años, y el "real situado" de

⁹ Alvaro Jara, *Guerra y sociedad en Chile*, 1971, pp. 132-141.

Felipe III llegó a ser uno de los regímenes más antiguos y sagazmente influyentes en los acuerdos institucionales de la Colonia.

La sociedad chilena llegó a especializarse en el territorio de una forma comparable, por ejemplo, a la que mantiene a los pescadores cerca de aguas favorables o a los leñadores en la vecindad de los bosques. Los soldados profesionales vivían al sur del Bío Bío, dispersos en fuertes y trincheras, en toda la zona de la guerra. Ellos percibían sueldos por sus servicios en lugar de tierras e indígenas como sus predecesores en el Valle Central. Salvo una decisiva victoria sobre los araucanos —que no ocurrió—, sus posibilidades de llegar a ser terratenientes al término de su tiempo de servicio eran bastante escasas. Normalmente reclutados en Perú y España, eran traídos directamente por mar a Concepción; cumplían su servicio en la zona de guerra y la mayoría de los sobrevivientes se sentían felices de regresar a sus lugares de origen.

Los terratenientes civiles, liberados de sus deberes militares, vivían 400 millas al norte de la línea del frente, en la capital mediterránea de su pacífica y próspera isla continental. Controlaban la economía del país, ocupaban prácticamente todas las posiciones de importancia política y tenían el indisputado monopolio del prestigio social en la distante provincia imperial.

La autoridad y el poder adquirieron situaciones geográficas operativas; el poder militar se encontraba al sur del Bío Bío y estaba subordinado a la autoridad civil ejercida desde el Valle Central. Sólo durante breves períodos la sede del gobierno fue transferida a Concepción, pero fueron escasas excepciones y la ciudad capital de Santiago jamás estuvo en peligro de perder su primacía¹⁰.

En la sociedad colonial, los militares a sueldo virtualmente no tenían acceso a la propiedad de la tierra ni tenían gran prestigio social, salvo en contadas circunstancias tangenciales. Una vez que el ejército profesional se constituía formalmente, sus miembros tenían pocas oportunidades de cambiar su *status* original. Nacidos en el estrato medio de la sociedad provincial,

¹⁰ Es digno de notar que, a pesar de que esta dicotomía chilena de poder y autoridad nació en circunstancias excepcionales, incluida la única guerra en las Indias que los españoles nunca ganaron, el *status* relativo de los poseedores del poder militar y civil fue una característica de la tradición imperial española. Posiblemente el ejemplo más conocido y dramático de la secular subordinación del guerrero al burócrata fue la derrota de Gonzalo Pizarro, el popular caudillo y hombre de poder, frente a Pedro de la Gasea, el leal funcionario civil y gobernante. Véase C. Veliz. *The centralist tradition of Latin America*, Princeton, 1980, pp. 7, 65-66.

los militares han conservado esa posición por siglos. Debajo de ellos se extendía una masa de gente anónima para quienes obtener el **status** y la paga de un soldado era entonces, como ahora, un paso considerable hacia arriba en la escala social; sobre los militares, la sociedad se encumbraba hacia una extraña clase de ricos, poderosos y prestigiosos civiles. Desde un comienzo y hasta el logro de sus aspiraciones como cuerpo, militares y otras, los soldados profesionales en Chile han sido manejados de acuerdo con su procedencia de clase media. Las fuerzas armadas pueden, efectivamente, ser un ejemplo de una clase media militarizada¹¹.

Estas tres constantes: la secular distancia social entre autoridad civil y militar; la insularidad territorial; y la ausencia de divisiones regionales, han jugado un rol decisivo en la formación de la sociedad chilena, contribuyendo al progreso gradual de los sectores medios hasta alcanzar su actual supremacía y consolidando el dominio del Valle Central sobre el resto del país. No siendo por fuerza los factores más importantes en la historia de Chile, estas constantes son quizás las más inadecuadamente valoradas.

El paso del tiempo confirma que la distinción entre continuidades y rupturas es a la postre insignificante. Todo cambia y, al cabo del tiempo, llega a ser otra cosa. Mi preocupación, sin embargo, no es el tiempo geológico sino la historia humana. Este es el campo donde la imposibilidad de predecir reina sin contrapeso; no todo cambia a la misma velocidad ni en igual forma; algunas características del panorama social son más duraderas que otras, y ejercen su influencia en los habitantes antiguos y en los recién llegados simplemente por presencia; otras desaparecen pronto por carecer de interés; algunas persisten a pesar de continuas declinaciones. En un mundo de relaciones no esclarecidas totalmente, no deberían ser descartadas las modestas bases que se proponen a favor de las constantes históricas. La supervivencia de rasgos identificables a través de algunos siglos no constituye un logro insignificante. El problema de definición, que inevitablemente aparece, se resuelve, a mi juicio, con la renuncia a definir. No existe necesidad absoluta de describir las constantes y variables como algo más que síntomas. ¿Se necesita definir la guerra o la paz para escribir sobre ellas? ¿Cuándo se convierte una escaramuza en batalla? Posiblemente es exagerado decir que las definiciones exactas son inútiles en la investigación histórica, pero

¹¹ Esto también se refleja en la ausencia total de tradiciones aristocráticas en los regimientos, semejantes a las existentes en las fuerzas armadas británicas y prusianas. El rol militar de la aristocracia en Chile no ha pasado inadvertido, pero ha estado restringido a los tiempos de guerra. La aristocracia raras veces usa uniforme en tiempo de paz.

parecen ser menos necesarias que en otras disciplinas, y existe al menos la inquietante sospecha de que su precisión se logra quitándoles vigor a sus tesis. Procederé sin tratar de definir estos esquivos conceptos.

Tres políticas bien difundidas del gobierno del Presidente Allende han sido, de diversos modos, interpretadas fuera de Chile como rupturas cruciales que provocaron, principal o parcialmente, su eventual caída. Ellas fueron: el acercamiento diplomático con los países de la órbita, o bajo la influencia soviética; la nacionalización de las minas de cobre, hasta entonces de propiedad extranjera, y la reforma agraria. Estas interpretaciones, sin embargo, son engañosas, por cuanto las tres medidas políticas son un buen ejemplo de constantes en la vida política y económica de Chile; son variantes de aortodoxia más que variables revolucionarias.

La aparentemente abrupta decisión de establecer relaciones diplomáticas con un grupo de países comunistas es perfectamente concordante con la práctica tradicional y con las líneas teóricas de la política internacional chilena. Era ciertamente la continuación directa de la política seguida por la administración precedente del Presidente Frei. Se podría incluso argumentar que fue durante los últimos gobiernos radicales y los de los Presidentes Ibáñez y Alessandri que Chile se apartó temporalmente de la ortodoxia, en respuesta, tal vez precipitada, a las sugerencias de los Estados Unidos.

La política exterior de Chile durante el pasado siglo y medio se había apartado pocas veces de las enseñanzas de Andrés Bello¹². Existen, por supuesto, aspectos de política en los que tal relación puede haberse atenuado, pero éste no es uno de ellos. En dicho punto es mejor citar lo que Bello decía acerca de otorgar reconocimiento a las naciones nuevas, o a las antiguas con nuevos gobiernos. En su ahora clásico Tratado de Derecho Internacional, expresó que "La independencia y soberanía de una nación es, desde el punto de vista de otras naciones, solamente una cuestión **de tacto**. Sobre este hecho debe estar naturalmente fundada la facultad de tratar con ella, so-

¹² Andrés Bello (Caracas, 1781 - Santiago, 1865) vivió en Londres desde 1810 a 1829, trabajando en diversas oportunidades con representantes diplomáticos de Venezuela, Colombia y Chile. En 1829 fue invitado por el Gobierno de Chile a hacerse cargo de la edición del diario oficial *El Araucano*, y viajó a Chile sin volver nunca a Europa. En 1864 su fama como académico e internacionalista era tan reconocida, que Estados Unidos le pidió ser arbitro en sus diferencias con Ecuador; Perú y Colombia hicieron otro tanto un año más tarde. Además de sus trabajos en Derecho Internacional, fue el autor del Código Civil chileno; fundador y primer rector de la Universidad de Chile; un académico de alto valor en materias literarias y un distinguido poeta.

bre una base de igualdad. Si se forma un nuevo estado... los otros estados sólo necesitan asegurarse de que el nuevo sea de hecho independiente y que haya organizado (un gobierno) con autoridad para dirigir y representar a sus miembros, y, en algunos casos, asumir responsabilidad por su conducta... Si se cumplen estos requisitos (las demás naciones), no pueden en justicia negarse a reconocerla como miembro de la sociedad de naciones..."¹³. Simplemente esto significa que el reconocimiento diplomático no implica aprobación. Una nación solamente reconoce el hecho de que otra existe; expresar esto no significa que celebra su existencia. Cuando Chile, por ejemplo, declinó reconocer la existencia de un gobierno soberano e independiente en China Continental, se apartó de la doctrina de Bello por instigación, justificada o no, de los Estados Unidos. Cuando el gobierno del Presidente Frei, primero, y luego el del Presidente Allende, establecieron relaciones diplomáticas con un grupo de países del bloque soviético, esto no fue una desviación, sino un retorno a la ortodoxia. Una ortodoxia, por lo demás, que prima sobre las tendencias del gobierno actual en Chile, que mantiene muy buenas relaciones con regímenes tan disímiles como los de Rumania y de la República Popular China¹⁴.

La nacionalización de las minas de cobre de propiedad extranjera de la **Gran Minería** ha sido mencionada también como una ruptura radical, que pudo haberle costado al Presidente Allende su gobierno y su vida. Esto es absurdo. La penetración del sector público en la economía por medios legales es una de las más antiguas características de la vida política y económica de la nación chilena. Aún en su forma actual, le debe menos al marxismo-leninismo que a la tradición centralista castellana. El ejemplo más antiguo documentado es probablemente el establecimiento de granjas y tiendas reales por el Gobernador Alonso de Ribera en 1603 para asegurar las provisiones que necesitaban las milicias acantonadas en la frontera sur. En este siglo, todos los partidos políticos mayoritarios, con excepción del antiguo Partido Liberal y el Conservador, han incluido en sus programas electorales medidas de intervención estatal en las actividades de la **Gran Minería**, y en muchos casos se han referido específicamente a la nacionalización de las minas de cobre. Una vez más, esto está muy de acuerdo con la política real española, que consideraba el subsuelo como propiedad inalienable de la Corona. Cuando se envió la ley de nacionalización al Congreso chileno en 1971, fue aprobada por unanimidad. En un Congreso dividido

¹³ Andrés Bello, *Principios de Derecho Internacional*, 3ª edición, París, 1873, p. 27 (Traducción del autor).

¹⁴ Es digno de notar que ésta no es una actitud compartida en la región. El gobierno de México, por ejemplo, ha negado por décadas el reconocimiento diplomático a los países que condena.

como aquel, este resultado es inconsecuente con el criterio de que la nacionalización es una ruptura drástica y absoluta.

Con respecto a la legislación agraria, que muchos observadores extranjeros atribuyen a la administración del Presidente Allende, ella fue, de hecho, la creación de los predecesores democratacristianos en el poder. La famosa ley de Reforma Agraria (Ley N° 16.640, promulgada en 1967) fue la realización del pensamiento de Jacques Chonchol, que en esa época ocupaba una situación prominente en el gobierno del Presidente Frei y era un miembro activo del Partido Demócrata Cristiano. Al final de la década del 60, Chonchol, abierta y repetidamente, se quejaba de que la ley agraria era aplicada en forma débil, y en consecuencia renunció para formar su propio partido político. Este grupo llegó más tarde a ser uno de los miembros de la Unidad Popular, y el Sr. Chonchol fue uno de los cinco precandidatos nominados para Presidente en representación de su coalición¹⁵. Queda claro, entonces, que sus desacuerdos respecto a la forma en que el gobierno del Presidente Frei estaba aplicando la ley lo eran solamente de grado, ya que, después de todo, él era el autor principal de la ley.

La ley de Reforma Agraria de la Democracia Cristiana no surgió de la nada, sino que fue la culminación política y administrativa de un proceso que se extiende bastante más allá de 1964, cuando el Partido del Presidente Frei llegó al poder. La reforma de la agricultura había sido una preocupación importante de varios gobiernos de distinto color político durante un lapso de más de medio siglo. Hasta en la Constitución de 1925 los legisladores consideraron apropiado consagrar una declaración sobre este problema. En la sección 10-14 se proclama solemnemente que "El Estado vigilará la adecuada división de la propiedad (agrícola) y la creación de granjas familiares..."¹⁶. Esto repercutió en 1928 y 1929, cuando fueron aprobadas disposiciones legales de importancia por la administración Ibáñez, para estimular y regular la división de los latifundios y la creación de cooperativas agrícolas¹⁷. Diez años más tarde, en su

¹⁵ Los otros precandidatos eran el Dr. Salvador Allende, del Partido Socialista; el profesor Alberto Baltra, del Partido Radical; el Sr. Pablo Neruda, del Partido Comunista; y el Sr. Rafael Tarud, perteneciente a un pequeño grupo de antiguos *ibañistas* que actuaban bajo el nombre de PAL. Cada aspirante tenía el total apoyo de su respectivo partido, excepto el Dr. Allende, quien había sido nominado por sólo una cantidad de votos socialistas, absteniéndose la mayoría.

¹⁶ James Becket, "Problemas de la reforma agraria", en Osear Delgado, editor, *Reformas agrarias en la América Latina*, México, 1965, p. 565.

¹⁷ Estas leyes, frecuentemente descartadas como inconsecuentes por comentaristas demasiado ardorosos, fueron lo bastante importantes como para impulsar el comentario de que "más que ninguna otra cosa, el ca-

programa electoral, el Frente Popular prometió "otorgar ayuda efectiva a los medianos y pequeños agricultores, y estimular la colonización de las tierras parceladas por empleados, obreros y trabajadores agrícolas"¹⁸. Una vez en el poder, sin embargo, el Presidente Aguirre Cerda no persiguió muy asiduamente estos objetivos, y el próximo paso importante en el proceso de la reforma agraria legal fue dado cuando el gobierno del Presidente Jorge Alessandri propició, exitosamente, la ley N° 15.020 de Reforma Agraria, promulgada el año 1962, que, en su primer artículo, establecía la obligación legal de los propietarios agrícolas de cultivar toda su tierra en forma productiva. También se transformó la antigua **Caja de Colonización Agrícola**, fundada bajo la administración Ibáñez, en **Corporación de la Reforma Agraria**, o CORA¹⁹ una entidad que, dos años más tarde, bajo el gobierno del Presidente Frei, fue dirigida por el propio Sr. Chonchol.

Sin duda, las legislación de Ibáñez y Alessandri presagiaban silenciosamente algunos de los rasgos de las reformas agrarias posteriores; pero aún en su exclusivo aspecto político, sin tomar en cuenta cuán estrechamente se interprete el apoyo a la reforma agraria del Sr. Chonchol, no puede desconocerse el hecho de que el Partido Demócrata Cristiano, que le dio su mayor apoyo, se formó por la fusión, en 1957, de la Falange y del Partido Social Cristiano, grupos que se habían separado del antiguo Partido Conservador.

Evidentemente, las reformas democristianas fueron aplicadas con vigor sin precedentes por el Sr. Chonchol desde su cargo de Ministro de Agricultura en el gobierno de la **Unidad Popular**, pero esto no debe opacar el hecho de que su ley agraria representaba un amplio sector de opinión y experiencia, mucho de un conservador ancestro acumulado en varias décadas.

Si estas tres políticas —la de apertura hacia los países comunistas, la de nacionalización de los yacimientos de cobre de la **Gran Minería** y la de Reforma Agraria— hubieran sido aplicadas, inexorablemente y a la letra de la legislación que, en cada caso, las autorizaba, el Presidente Allende podría haber completado su período sin mayor dificultad. No es en estas polémicas

rácter expropiatorio de esta legislación dirigió el movimiento que condujo al derribo del gobierno de Ibáñez . . . ", George McCutchen McBride, Chile: *Land and society*, New York, 1936, p. 271.

¹⁸ John Reese Stevenson, *The Chilean Popular Front*, Filadelfia, 1942, p. 83. En 1922, el entonces senador Pedro Aguirre Cerda trató, infructuosamente, de pasar por el Congreso una ley introduciendo reformas moderadas en la distribución de la propiedad de la tierra. Alberto Cabero, *Recuerdos de don Pedro Aguirre Cerda*, Santiago, 1948, pp. 119-120.

¹⁹ Becket, "Reforma Agraria", p. 565.

iniciativas, tal vez mal aconsejadas, pero intachablemente legales, donde se hallarán las malogradas rupturas que pudieran incrementar una significativa disensión interna y ayudar al examen de aquellas interpretaciones de la crisis de 1973, distorsionadas por un prejuicio superficial en su apreciación.

Existen muchas de esas rupturas, pero la mayoría han sido debidamente estudiadas, especialmente las que contribuyeron al colapso general de la economía. Yo intento referirme, en este trabajo, a las que han merecido menos atención y que parecen haber agravado los efectos de otros factores obviamente más importantes.

Una de tales variables fue el sistema de cuotas para regular la asignación de cargos en el gobierno entre los seis partidos miembros de la Unidad Popular. Este arreglo fue acordado antes de la elección de 1970, cuando muy pocos esperaban un triunfo de la coalición. Destinado a calmar los temores de los socios menores de la coalición, era a primera vista simple y atractivo; los cargos en el gobierno debían ser distribuidos de acuerdo a un calendario más o menos fijo (se contemplaba una cierta flexibilidad para casos especiales) que favorecía a los partidos pequeños, pero al mismo tiempo para asegurar que ningún partido obtuviera control sobre el aparato administrativo del país. La distribución vertical estaba arreglada de modo que nunca dos miembros de un mismo partido pudieran encontrarse subordinados uno al otro en posiciones claves. De este modo, un Vicepresidente Ejecutivo socialista de una corporación estatal tendría subordinados de todos los partidos de la coalición, menos del propio.

Si los miembros de la Unidad Popular hubieran estado de acuerdo sobre cada aspecto del programa de gobierno, esta caprichosa distribución de cargos ya habría ocasionado serias dificultades; pero como en realidad, los socios de la coalición no estaban completamente de acuerdo en muchas materias, la aplicación de este sistema de cuotas, por sí solo, sin la influencia de ideologías extremistas, conspiraciones foráneas o el ineficiente manejo de la economía, casi consiguió el derrumbe del gobierno.

A medida que se descendía a través de los diversos estratos políticos determinados por las cuotas, cada decisión administrativa de alguna importancia debía ser referida a cada organización partidista para su ratificación o, al menos, para su información. En consecuencia, las decisiones tenían que ser aprobadas repetidamente con el consiguiente retardo. Esto en el mejor de los casos, si no había obstáculos; porque si cualquiera de los socios de la coalición hacía alguna objeción, el proceso se anulaba y las consultas comenzaban de nuevo.

La ineficiencia era la menor de las dificultades causadas por el sistema de cuotas. Más alármente era el efecto desmoralizante que tenía sobre la burocracia profesional civil, que estaba acostumbrada a procedimientos ordenados en cuanto a

nombramientos, ascensos y despidos. Nadie pretende suponer que los miembros de la administración pública chilena eran inocentes en materia de compromisos políticos antes de 1970; pero hasta que la Unidad Popular no alcanzara el poder, las incursiones efectuadas por la politización, en especial durante la hegemonía radical, después de 1941, y bajo el régimen democratacristiano a partir de 1964, habían sido tímidas, cuando no defensivas. Obviamente, nunca se reconoció de manera formal que el ser miembro de un partido facilitara o dificultara el acceso a determinados puestos de gobierno.

La introducción del sistema de cuotas fue universalmente considerado como un siniestro y deliberado intento por minar la autoridad profesional de la burocracia civil. Esta interpretación puede parecer excesivamente severa. Es posible que las cuotas hayan sido simplemente un mal ideado plan electoral, inesperadamente promovido —por un resultado electoral sorpresivo— a la categoría de principio oficial para la distribución del botín. En todo caso, esta desviación de la ortodoxia fue la que causó los mayores recelos en el sector medio de la sociedad, de cuyas filas tradicionalmente se ha nutrido la administración pública.

Mucho más grave fue la inexplicable y desconcertante tolerancia de una organización paramilitar ilegal. Esta fue realmente una ruptura radical que minó la confianza en la autoridad civil de la presidencia y en la integridad profesional de las Fuerzas Armadas. Negándose ostensiblemente a controlar estas brigadas armadas ilegales, el gobierno pareció confirmar la sospecha de aquellos que temían una conspiración revolucionaria con el consentimiento del palacio presidencial.

Estas organizaciones paramilitares se habían formado bajo los auspicios de las facciones extremas de los partidos de la coalición, en especial el ala izquierda del Partido Socialista, o por grupos políticos que se situaban mucho más a la izquierda de la Unidad Popular. El principal fue el **Movimiento de Izquierda Revolucionaria**, conocido como MIR, cuya política oficial, profusamente difundida en su revista **Punto Final**, era el hostigamiento constante como parte integral de una estrategia destinada a derumbar el edificio de la legalidad burguesa. Siguiendo estas directivas, las brigadas armadas no sólo se mostraron en público repetidamente, sino que asumieron el liderazgo en las ocupaciones violentas ("tomas") de fábricas y tierras, que con frecuencia alarmante ocurrieron durante 1972 y 1973. Estas ocupaciones no tenían relación con la política legal de nacionalizaciones conducida por el gobierno; ellas eran ilegales fuera de toda duda. Las víctimas de las "tomas" eran precisamente las empresas industriales o agrícolas no afectadas por las leyes de expropiación, en general, porque eran empresas pequeñas con sólo un puñado de empleados. No existía justificación económica para estas "tomas"; su objetivo era simplemente político,

y la oposición a ellas era tan fuerte dentro de las filas de la Unidad Popular, especialmente en el Partido Comunista, como en el público en general. Este no era el único ni el mayor punto en disputa que dividía a la coalición, pero era tal vez el que tenía más publicidad, ya que el diario comunista **El Siglo** no ocultaba su desaprobación²⁰. Los comunistas y otros miembros moderados de la coalición se dieron cuenta inmediatamente de que las "tomas" recibirían una amplia y justificada publicidad en la prensa opositora, y de que los temores de los sectores medios acerca de las verdaderas intenciones del gobierno se intensificarían con razón. Acertaron. Si el Presidente se hubiera propuesto enemistarse con los sectores medios, nada podría haber superado los resultados que obtuvo permitiendo la introducción del sistema de cuotas en la Administración Pública y consintiendo la virtual inmunidad a las brigadas armadas.

Los funestos resultados de estas políticas, intencionadas o no, se intensificaron al sumarse el desconcertante fracaso por parte del Presidente en justipreciar la disposición de ánimo de las masas urbanas del centro de Chile. Allende se inclinó a adoptar un estilo de gobierno y de conducta personal en franca oposición con las tradiciones republicanas y —peor aún— ofensivo para los sentimientos del sector medio, de cuyo apoyo o

²⁰ No deben confundirse estas "tomas" con la intervención del Estado en el sector privado de la economía, realizada mediante la estrategia legal de invocar el decreto-ley 520, promulgado por la efímera 'República Socialista' de 1932. Este decreto-ley autorizaba al gobierno a intervenir en el manejo de —y aún a expropiar sin más trámite— cualquier empresa que se estimara que estaba operando en contra del interés público. Esta amplia descripción podía incluir, por ejemplo, el incumplimiento de los reglamentos de fijación de precios, el acaparamiento de mercadería con fines especulativos, la interrupción de labores para producir escasez, la falta de interés para producir eficientemente y a plena capacidad. En las circunstancias de la época, era virtualmente imposible prevenir abusos al aplicar un arma tan poderosa, y los casos documentados de infracciones fueron numerosos. Esto era inquietante, porque a medida que el tiempo transcurría y la situación política se tornaba más tensa y confusa, era posible que algunos altos funcionarios de gobierno estuviesen utilizando el famoso decreto-ley como un medio extralegal de extender el área de la economía bajo el control del gobierno sin considerar el mérito de cada caso en particular. Las consecuencias de estas intervenciones y expropiaciones indiscriminadas, muchas de las cuales afectaban a empresas demasiado pequeñas como para caer en los términos de la expropiación legal, eran psicológica y económicamente desastrosas. En todo caso, ellas consistían en un fenómeno absolutamente distinto de las violentas e ilegales "tomas" que llevaban a cabo las brigadas armadas del MIR y otras organizaciones similares.

aprobación permanentes dependía la supervivencia constitucional de su gobierno.

La casi mitológica y destacada figura del Presidente Manuel Montt, que gobernó dos períodos sucesivos entre 1851 y 1861, domina la historia de los hábitos y de las instituciones políticas chilenas. Estadista austero, prudente y dedicado, Montt era al mismo tiempo el producto y el arquitecto de los sectores medios republicanos de Chile. Su conservantismo antiaristocrático, sus frugales hábitos públicos y privados, y su meticulosa devoción por el deber, son recuerdos obligados de una tradición burocrática civil que puede rastrearse sin dificultad hasta Felipe II, el archiburócrata de los monarcas. No obstante sus orígenes, esta tradición es asociada normalmente con los más nobles, mejores y ejemplares momentos de nuestro pasado republicano. Los nombres de O'Higgins, Portales, Montt y Balmaceda constituyen sus ejes. Era una tradición admirada por el Presidente Allende, quien frecuentemente mencionaba la inspiración que encontraba en el ejemplo de Balmaceda. Una tradición, sin embargo, de la que se apartó inexplicablemente una vez que obtuvo la Presidencia. Su estilo para gobernar, que muchos podían encontrar original y atractivo, era, en efecto, gracioso, entretenido y pintoresco, pero ningún margen de amplitud permitiría describirlo como austero, prudente o preocupado por esa escrupulosa consideración por las normas que deben constituir una capital preocupación de la más alta función pública del país.

Thomas Jefferson dijo al barón Von Humboldt que cuando un hombre asume responsabilidades públicas, debe considerarse a sí mismo como propiedad pública. Los hombres públicos deben resignarse a la pérdida de su privacidad y de sus agradables privilegios. La privacidad es un lujo prohibido para quienes nos dirigen. Tal vez esto no deba ser así, pero la experiencia de un par de siglos de gobierno democrático en muchos países confirma plenamente que lo es. A pesar de que el Presidente Allende era un político con experiencia, este aspecto de su vida pública o no lo advirtió, o bien se sintió lo bastante seguro como para ignorarlo. Es también posible afirmar convincentemente que su negativa a ocultar o a modificar su conducta fuera un rasgo característico, un reflejo de su valor personal y de su integridad. Lo que está fuera de discusión es que su evidente extravagancia y el descaro con que manejaba algunos aspectos delicados de su vida privada no ayudaron en absoluto a congraciarse con el sector medio, que tenía muy buenas razones para sentirse en creciente peligro.

Para un país tan legítimamente orgulloso de su tradicional austeridad republicana, el arribo de un "bon viveur" como el legendario "Chicho" Allende a la presidencia era una ruptura total. Se esperaba, no obstante, que una vez en la presidencia, el peso de esa tradición se hiciera sentir por sí mismo y que, como en el caso del Rey Enrique de Shakespeare, él respondería y volvería

la espalda a Falstaff y a cuanto con él se relacionara. Estas expectativas se vieron frustradas. En contraste con sus inmediatos predecesores así como con los grandes presidentes del siglo XIX, incluyendo a su muy admirado Balmaceda, Allende mostró una inquietante inclinación a tolerar un tipo de gastos ostensibles que la opinión del sector medio estimaba como incompatibles con las necesidades de la Presidencia. Jorge Alessandri y Eduardo Frei, por ejemplo, continuaron viviendo uno en su departamento del centro y el otro en su casa, durante sus respectivos períodos presidenciales. El Presidente Alessandri hacía el trayecto a pie todos los días desde su departamento en calle **Phillips**, cerca de la **Plaza de Armas**, al Palacio de Gobierno; el Presidente Frei llegaba a éste conduciendo su automóvil familiar desde su casa en calle **Hinderburg**, donde había vivido los últimos 30 años. El Dr. Allende, primer socialista elegido como Presidente, sorprendió a amigos y opositores al adquirir dos suntuosas residencias, una para él y otra para su secretaria y confidente. Su viaje diario hacia y desde su despacho en el centro era un espectáculo que, una vez visto, nunca se olvidaba. La caravana de media docena de automóviles corriendo a alta velocidad precedida por policías en motocicletas, que hacían resonar sus bocinas y prendían luces centelleantes, era un cambio sorprendente comparado con la caminata matinal del Presidente Alessandri o el solitario viaje en automóvil del Presidente Frei. Los columnistas chismosos y los personeros de la oposición tenían abundante tema con estas idas y venidas, pero pocos observadores apreciaban el efecto devastador que tenía la conducta chocante y desinhibida del Presidente en el sector medio, víctima de las bandas armadas que, presumiblemente, actuaban con su consentimiento. Era como si, después de 1945, en la época de reformas y nacionalizaciones del Partido Laborista, Mr. Clement Attlee hubiera comenzado a conducirse como el Príncipe Regente en sus peores días.

La interacción entre la personalidad del Presidente y las constantes del carácter nacional chileno constituye una clave decisiva para determinar la importancia de los factores locales, ignorados por la creencia mapuche, acerca de la crisis de 1973. Las interpretaciones actuales más aceptadas se inclinan por atribuir responsabilidad histórica a fuerzas vastas, cósmicas, periódicas, cataclísmicas y, tal vez, irreversibles e inevitables. Ellas pueden realmente existir, pero yo estimo que cuando llegan a manifestarse es frecuentemente a través de la acción de hombres y mujeres, algunos más influyentes que otros. Cuando las tendencias políticas y sociales se transforman en conflictos, las personalidades y los protagonistas intervienen, frecuentemente, distorsionando e incluso provocando el resultado final. Esto no tiene que ser así siempre, pero se puede afirmar que sí lo fue en la serie de acontecimientos que finalmente condujeron

a la abierta ruptura entre el Presidente y la clase media urbana de la sociedad chilena.

El Presidente Allende era un orador talentoso, un hombre de fuertes sentimientos y muy orgulloso. Durante cuatro décadas de activa vida política, construyó alrededor suyo y de algunos de sus asociados un muro muy alto de sonoras consignas revolucionarias que tal vez él mismo no haya tomado tan en serio como sus seguidores. En todo caso, siendo un experimentado político, Allende debería haberse percatado al final de que estaba atrapado por su oratoria en una posición de innecesaria intransigencia. Si hubiera tratado, en última instancia, de modificar la violencia combativa de su bien recordado lenguaje, ello habría sido interpretado como un signo de debilidad²¹. Haber moderado un curso de acción que él obviamente pensaba que iba a un derramamiento de sangre y a un desastroso enfrentamiento habría incitado acusaciones de cobardía y capitulación. Si modificaba en cualquier forma su política de tácito estímulo a las brigadas armadas, corría el riesgo de ser censurado por sus más cercanos colaboradores, ante quienes él era muy vulnerable. Era una honorable dependencia, nacida del orgullo quizás, pero profundamente sentida. Como dramáticamente lo confirmaron sus actuaciones —o la falta de ellas—, a sus ojos bien valía la pena morir por ella.

A instancias de las autoridades eclesiásticas, en los últimos días del mes de julio de 1973, sólo unas pocas semanas antes de la caída del gobierno, se iniciaron las negociaciones entre el Presidente Allende y el senador Patricio Aylwin, representando al Partido Demócrata Cristiano, el partido mayoritario de la oposición en el Congreso, para tratar de llegar a un acuerdo que previniera la guerra civil que en esos días parecía inminente²².

²¹ Había presagios evidentes de que esto no era un cálculo erróneo de la situación. Ya en marzo de 1973, el entonces Ministro del Interior y miembro del ala moderada del Partido Socialista, declaró que el gobierno aplicaría estrictamente la ley "contra aquellos que buscan promover desorden ocupando fábricas, aldeas, sitios eriazos o tierras...". Esta declaración fue contestada de inmediato por el MIR mediante otra que decía que "continuaría su lucha contra los ricos ... hasta que el poder económico quede en poder de los obreros, estén o no de acuerdo los 'reformistas' del gobierno". *Keesings*, agosto 13-19, 1973, p. 26039.

²² El Partido Comunista aprobó oficialmente este "diálogo" entre el Presidente y el principal partido de la oposición; el Partido Socialista lo rechazó formalmente, y el MAPU y la Izquierda Cristiana, dos miembros menores de la coalición, dejaron su opción abierta, absteniéndose de cualquier declaración, pero declinando participar en las discusiones. El Mercurio 1º y 3 de agosto, 1973; *Keesing's*, agosto 13-19, 1973, p. 26039.

El senador Aylwin propuso al Presidente una serie de medidas que su partido consideraba como urgentes y esenciales para la continuación de un gobierno constitucional y democrático en el país. Se incluía la promulgación de una reforma constitucional (ya aprobada por el Congreso, pero retenida en el despacho presidencial) que, se esperaba, pondría término a las expropiaciones **de facto**; la devolución de las tierras y fábricas, confiscadas ilegalmente, a sus legítimos dueños; la organización de un gabinete de conciliación para restaurar la confianza pública; y, lo más importante, se pedía al Presidente repudiar los abusos perpetrados por las brigadas armadas, ratificando la reconocida ilegalidad de dichas organizaciones, y ordenar su disolución y el cumplimiento estricto de la legislación existente sobre posesión ilegal de armas de fuego.

Una semana de intensas negociaciones transcurrió sin resultados. Lo más cerca que estuvo el Presidente de aceptar la necesidad de medidas urgentes y efectivas fue sugerir la creación de comités especiales para investigar cada acusación de la oposición. Esto fue rechazado como una burla y el diálogo terminó abruptamente. El 22 de agosto la Cámara de Diputados decidió, por 81 votos contra 47, aprobar una resolución declarando ilegales los actos del Presidente. Después de esto, la intervención de las Fuerzas Armadas era sólo cuestión de tiempo.

En ese momento se argumentó que el único propósito del Presidente al aceptar el diálogo era ganar un respiro para que sus partidarios se prepararan para lo que él estimaba como inevitable: la confrontación armada. Esto no es imposible, pero sí dudoso. En realidad no quedaba mucho tiempo, y unos días más o menos no habrían producido mayor diferencia. Hay pocas dudas, por otra parte, de que si hubiera habido alguna manera aceptable —y honorable— de obtener los objetivos legales del gobierno sin el riesgo de una guerra civil, el Presidente la habría aceptado, más aún cuando ninguno de los requerimientos propuestos por el senador Aylwin era en manera alguna deshonesto o excesivo: significaban un respetuoso pedido a la más alta autoridad elegida por la nación para apoyar las leyes que, bajo juramento, estaba obligado a obedecer y hacer cumplir. Sin embargo, el Presidente no podía hacer esto sin liberarse, en primer término, de la retórica revolucionaria que le imponía una dureza peligrosa y políticamente ineficaz. Cualquier concesión, la más trivial, podía ser interpretada como una rendición deshonrosa, y sus más severos y tenaces críticos, los que más le afectaban, eran los más cercanos y los más amados por él, especialmente su hija favorita Beatriz, o "Tati", como le gustaba llamarla.

Beatriz Allende era la segunda de las tres hijas del Dr. Salvador Allende. Tras estudiar en el Dunalastair, uno de los más prestigiosos colegios chilenos de señoritas, terminó brillantemente la carrera de Medicina en la Universidad de Chile y

se preparó para seguir los primeros pasos de su padre como médico cirujano. Estos planes fueron interrumpidos por una serie de visitas a Cuba en la década del 60, acompañando a su padre, donde el entusiasmo contagioso de los revolucionarios cubanos, especialmente el del fascinante Ernesto "Che" Guevara, otro doctor que abandonó la medicina por la política, le produjo una profunda impresión. Se fue compenetrando cada vez más, políticamente, inclinándose con decisión hacia la izquierda, a posiciones mucho más extremas, por ejemplo, que las de los partidos de la futura **Unidad Popular**. Después que el Dr. Allende fue elegido Presidente, corrieron rumores afirmando que estaba ligada a grupos extremistas cuyas actividades violentas eran realizadas con tal impunidad, que desmentían la capacidad o la voluntad del gobierno para controlarlas. Estas suposiciones bien pueden haber sido infundadas, ya que nunca hubo oportunidad de comprobarlas ante un tribunal de justicia; pero lo que estaba fuera de toda duda era su identificación con el ala de extrema-izquierda del Partido Socialista de su padre, un grupo que también patrocinaba las brigadas armadas y favorecía las tácticas de confrontación en busca de lo que ellos describían como un estado de "revolución permanente". Beatriz llegó a ser, como ella misma lo afirmaba enérgicamente, la conciencia política de su padre²³.

Si el Presidente Allende hubiera accedido a las proposiciones del senador Aylwin, Beatriz lo hubiera interpretado como un signo de debilidad, casi una traición a los principios revolucionarios, y así se lo hubiera dicho en su cara, sin duda. Peor aún: a sus propios ojos habría sido culpable de renegar de su hija en público. Todo cuanto ella hacía en política él lo toleraba o alentaba. Sabía que Beatriz había optado por ideas extremas porque las creía justas, pero también porque, como él mismo, era prisionera de la misma vibrante elocuencia revolucionaria. Aceptar los términos propuestos por la oposición equivalía a declarar a su propia hija fuera de la ley; a castigarla y a humillarla por haber creído en él; a abdicar de la responsabilidad de mantenerse firme en la hora de peligro.

El gobierno del Presidente Allende fue derribado por un golpe de Estado de la clase media militar. Los sectores medios se sentían amenazados y atemorizados más allá de toda tole-

²³ Entretanto, después de un fracasado primer matrimonio que terminó en divorcio, Beatriz se casó nuevamente, esta vez con un alto funcionario cubano que servía como Primer Secretario de la Embajada de Cuba en Santiago durante el gobierno de la *Unidad Popular*. El 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado, ella fue una de las últimas personas conducidas fuera del Palacio de Gobierno, antes que los militares lo atacaran. Después de la caída del gobierno, se le otorgó un pasaporte para viajar a Cuba, donde vivió hasta el 12 de octubre de 1977, fecha en que se suicidó.

rancia; temerosos, inseguros, tal vez pusilánimes y apocados, clamaron ante sus primos, sobrinos, hermanos y amigos de uniforme para su defensa, y ellos les respondieron. Los factores que llevaron a la crisis de 1973 son principalmente los que dicen relación con el distanciamiento masivo de los sectores dominantes de clase media, y entre ellos es muy probable que el carácter del Presidente haya jugado un rol principal, si no decisivo.

Cuando tuvo la oportunidad de elegir —según su punto de vista— entre el honor y la vida, el Presidente Allende comprendió que no podía eludir el desafío. El problema había dejado de ser político y no tenía solución política; estaba trágicamente arrinconado. Cuando vino el desenlace, era un Wotan exhausto y tullido, lanzado a la historia, encadenado por los sentimientos, maniatado por los misterios de una retórica gastada —fogosa un día—, condenado a la intransigencia y a las esperanzas de redención por medio de la catástrofe.